

año 1 | número 2 |  
noviembre 2005

# Debates contemporáneos | 2 en la prensa internacional



**Dirección General de  
Cultura y Educación**  
Gobierno de la Provincia  
de Buenos Aires

Autoridades provinciales

Gobernador

Ing. Felipe Solá

Director General de Cultura  
y Educación

Prof. Mario Oporto

Subsecretaria de Educación

Prof. Delia Méndez

Subsecretario Administrativo

Lic. Gustavo Corradini

Vicepresidente 1°

del Consejo General  
de Cultura y Educación

Prof. Jorge Ameal

Auditor general

Cdor. Horacio Landreau



**Dirección General de  
Cultura y Educación**  
Gobierno de la Provincia  
de Buenos Aires

## Debates contemporáneos en la prensa internacional

Publicación periódica de la Dirección General  
de Cultura y Educación

año 1 | número 2 | noviembre 2005

Calle 13 y 56 (1900) La Plata, Provincia de Buenos Aires,  
Argentina

Tel. (+54 221) 4297600 /e-mail: dirgab@ed.gba.gov.ar

www.abc.gov.ar

## Sumario

Desarrollo, educación y participación en la vida pública .....	3
Más leña al fuego de Medio Oriente .....	4
Las calamidades aquejan a la administración republicana .....	6
Medio Oriente, un rompecabezas difícil .....	8
¿Sucursales de Abu Ghraib y Guantánamo en Europa? .....	10
La <i>laicidad</i> según Savater .....	12
Lo que ya no esconde la violencia en Francia .....	15
¿Falla la <i>igualdad</i> ? .....	17
Sindicalismo menguante .....	19
Menos libertad por menos seguridad .....	21
¿Aires de cambio en Israel? .....	23
Apuntes sobre la educación estadounidense .....	25
Más sobre la crisis social en Francia .....	28
Ejes del debate de la educación en España .....	30
El valor de Nuremberg .....	32
El problema de la <i>des</i> -integración social .....	34

*Debates contemporáneos en la prensa internacional* compila los comentarios elaborados diariamente por el asesor Lic. Leandro Reboiras, desde la Jefatura de Gabinete de la DGCyE. Quienes tengan interés en recibirlos regularmente podrán solicitarlos a dirgab@ed.gba.gov.ar, detallando nombre y apellido, institución y correo electrónico.

Las opiniones vertidas en esta publicación, que no ha sido sometida a revisión editorial, son de exclusiva responsabilidad del autor y en ningún caso constituyen la posición oficial de la DGCyE.

Diseño: SSE/Área de Publicaciones - Imagen de tapa: Leandro Vanderwildt, Julián Mollo.

# Desarrollo, educación y participación en la vida pública

Prof. Mario Oporto

La humanidad no ha logrado resolver a comienzos del nuevo siglo la paradoja que representa el avance de la democracia liberal –sobre todo en países donde había dictaduras y regímenes totalitarios hasta hace algo más de una década– junto con el proceso paralelo de marginación de enormes sectores sociales en las democracias más consolidadas del planeta, lo que años atrás era un rasgo casi exclusivo de los países del tercer mundo. Violencia social, irrupción del fanatismo religioso y deslegitimación de las instituciones democráticas son algunas de las resultantes de tal contradicción.

En el plano cultural, en tanto, otra característica de los tiempos que vivimos –y más riesgosa, por cierto, para el desarrollo de una ciudadanía plena– radica en el empobrecimiento del pensamiento abstracto que supone el abandono de la práctica de la lectura entre grandes sectores de la población. El debilitamiento del discernimiento crítico implica un grave condicionamiento para el desarrollo del Estado democrático y para la formación de una conciencia ciudadana. Frente al vértigo cada vez mayor que nos imponen las nuevas tecnologías de la información, no es casual que surjan fenómenos como el de los *nuevos iletrados*, aquellas personas que sabiendo leer y escribir no pueden, sin embargo, comprender lo que leen. De allí la importancia de la lectura como insumo básico del pensamiento y del ejercicio reflexivo.

En este contexto, la centralidad del desarrollo pasa por el conocimiento y, por tanto y fundamentalmente, por la educación. Los desafíos de la educación hoy son, entonces, mucho más complejos: los seres humanos necesitamos estar capacitados para manejar los códigos culturales básicos de la modernidad, aquellos que nos permiten participar en la sociedad civil y en la vida pública.

# Más leña al fuego de Medio Oriente

**Martin Indyk, ex embajador de los EEUU,  
advierte desde *Los Angeles Times*  
sobre el peligro que representa  
un Irán radicalizado para la integridad  
de Israel y la estabilidad de la región.**

El triunfo reciente del ultraconservador presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad –sucedió al moderado Mohammad Khatami– no augura esperanzas de una mejoría de la situación en Medio Oriente. Con un discurso reivindicativo de la revolución islámica que proclamó el ayatollah Khomeini en 1979 y del régimen teocrático del cual fuera su fundador, el nuevo presidente de Irán confirma algunas de las peores hipótesis planteadas luego de la derrota del tibio intento aperturista llevado a cabo por su antecesor. Hoy Irán está atravesado por numerosos conflictos que exceden sus propias fronteras.

Irán es un bastión del fundamentalismo religioso que azota al mundo musulmán, y que tiene manifestaciones en el plano político, cultural y religioso de varios países occidentales. El poder de la derecha conservadora cristiana en la administración de Bush, el espacio ganado por ultraconservadores en iglesias tradicionales, la radicalización de

grupos musulmanes europeos y el poder de sectores ortodoxos que no aceptan el “Gran Israel” bíblico, constituyen una muestra de las tensiones que el proceso de secularización enfrenta tanto en el Occidente cristiano, como en todo el orbe musulmán y en Israel.

Además de representar la dicotomía religión-secularización, Irán es pieza clave en Medio Oriente por su situación estratégica como país petrolero y por su injerencia mediante grupos terroristas en el conflicto palestino-israelí.

A partir de las declaraciones del presidente Amhadinejad por su deseo de “borrar a Israel del mapa”, *Los Angeles Times* publicó una columna de Martin Indyk, ex embajador de los EEUU y director del *Saban Center for Middle East Policy at the Brookings Institution*, donde advierte que –más allá de esta afirmación– Irán constituye un peligro para la integridad de Israel y la estabilidad de la región. Dice Indyk que las palabras del mandatario fueron

un verdadero momento “retro”, que recordaba las imágenes del ex presidente egipcio Gamal Nasser 40 años atrás cuando proclamaba que “el pueblo árabe debería arrojar a Israel al mar”. Frente a las condenas que levantó de la comunidad internacional, Amhadinejad adujo que solo repetía una sentencia que la revolución iraní hizo hace 27 años.

A diferencia de sus antecesores, y para justificar la amenaza a Israel, Amhadinejad explicó que el fundamento ideológico del Estado islámico iraní solo se entiende en el contexto de los siglos lucha del Islam contra los infieles. Para ser explícito, llegó a amenazar a líderes árabes que piensen en firmar tratados de reconocimiento del Estado de Israel.

En tanto, el tema nuclear presenta una arista diferente para el columnista. En este contexto, frente a quienes argumentan que Irán está a unos cinco años en su carrera para fabricar una bomba nuclear y que la comunidad internacional impidió, Indyk advierte sobre otra arma que utiliza en su lucha contra Israel: la actual guerra que denomina *por apoderados* y que lleva más de una década.

En efecto, los principales *apoderados* de Irán son dos organizaciones terroristas: *Hezbollah*, que opera en el sur del Líbano, y la organización palestina *Jihad Islámica*. Los servicios de inteligencia iraní son quienes entrenan y financian estas organizaciones, advierte el columnista. Sus ataques tuvieron relación con la derrota de Shimon Peres en las elecciones israelíes de 1996 –ganó el derechista Benjamin Netanyahu– que significó el estancamiento del proceso de paz iniciado por el asesinado primer ministro Yitzhak Rabín.

En mayo de 2000, luego de la retirada israelí del sur del Líbano *Hezbollah* focalizó su atención en los ataques palestinos contra Israel. La *Jihad* intentó ocupar un lugar de vanguardia

en la lucha palestina; sus actividades apenas podían distinguirse de los atentados suicidas perpetrados por *Hamas*, el otro grupo palestino.

Según Indyk, la estrategia iraní para boicotear el progreso en las negociaciones palestino-israelí se reflejaba, durante la *intifada*, en la actitud de la *Jihad* cada vez que *Hamas* tenía intenciones de alto el fuego por razones tácticas: “en cada una de estas ocasiones la frágil calma era rota por un ataque de la *Jihad*, el cual provocaba la represalia israelí y el regreso de *Hamas* a la acción”. De este modo, Irán se guardaba *la llave* para mantener la *intifada* en ebullición, según su conveniencia. Hoy, cuando más del 80% de los palestinos son partidarios de mantener la precaria calma existente, Irán mantiene la presión sobre la *Jihad Islámica* para que cometa actos terroristas.

En los nueve meses del actual cese de fuego, la *Jihad* fue autora de los cuatro mayores atentados explosivos responsables de quebrar la calma. En este contexto, el apoyo iraní a los grupos terroristas no es solapado: en septiembre de 2005 el líder de la revolución islámica, el *ayatollah* Khamenei, hizo una comparecencia pública con el líder de la *Jihad* para arrogarse el mérito de la retirada israelí de la Franja de Gaza y proclamar que “la *Jihad* es la única vía para combatir al enemigo sionista”.

Por tal motivo –concluye Indyk –, no dar importancia a las recientes amenazas iraníes sería una manifestación de tontería tan grande como la del presidente Amhadinejad con sus intimidaciones.

**Artículo de referencia:** Martin Indyk, “Iran’s bluster isn’t a bluff”, en *Los Angeles Times*, 1° de noviembre de 2005.

# Las calamidades aquejan a la administración republicana

**El catedrático estadounidense Paul Kennedy hace una evaluación muy crítica de las principales decisiones tomadas por el gobierno de Bush y pone en duda su idoneidad para manejar los destinos de EEUU.**

Frente al sombrío panorama internacional de nuestros días –donde tiene *méritos* la actual administración estadounidense–, muchos recuerdan con añoranza los mandatos demócratas de Bill Clinton, tanto dentro como fuera de EEUU. Sería absurdo desconocer que algunos de los problemas que aquejan a la comunidad internacional reconocen un origen anterior a la llegada de Bush al gobierno, también es cierto que este presidente demostró una desastrosa capacidad para gestionar las emergencias acaecidas, además de los frentes de conflictos que abrió su administración.

Un año después de su victoria electoral, acusado por los resultados de la guerra en Irak, la mala gestión durante el huracán Katrina, los escándalos de corrupción entre miembros de su entorno, el veto del ala conservadora del partido a su fallida candidata para la Corte Suprema y los niveles de aprobación pública en mínimos históricos, muestran que Bush

padece una debilidad prematura para un presidente al que le restan tres años de mandato.

La prensa estadounidense –más allá de la adscripción ideológica de cada medio– es bastante crítica con la actual gestión republicana. En mayor medida ocurre en Europa, donde el presidente Bush –independientemente de la guerra de Irak– nunca gozó de la simpatía que supo granjearse su antecesor.

*El País* publicó una columna de Paul Kennedy, titular de la cátedra J. Richardson de Historia y director de Estudios Internacionales de la Universidad de Yale, sobre las tribulaciones que atraviesa la Casa Blanca. Según Kennedy, entramos al siglo XXI en una situación curiosamente contradictoria, con grandes esperanzas respecto del progreso y la inventiva del mundo, pero con enorme angustia por la fragilidad de la naturaleza y la persistencia de nuestro pesimismo por sobre la capacidad humana de seguir avanzando.

Entonces, se pregunta cómo es posible que las catástrofes nos hagan *perder la brújula* con tanta frecuencia. Cualquiera que observe la política de EEUU, en especial la presidencia de Bush, estará de acuerdo en que corren unos tiempos difíciles para la Casa Blanca.

Sin embargo, no todos los golpes tendrían que haber sido una sorpresa, puesto que algunos se podían visualizar. El caso más característico es la fallida operación militar en Irak que fue una de las peor planeadas y ejecutadas de la historia de EEUU. El reciente referéndum que aprobó la nueva constitución iraquí –señala Kennedy– podría salvar algún resto del naufragio pero la realidad indica que los votos emitidos no sugieren una victoria de la democracia liberal, sino una reafirmación de la profunda división del pueblo iraquí en función de criterios étnicos y religiosos.

Al margen de los modestos progresos que puedan producirse en adelante, Bush –empujado por los *neocons* de su partido y con un gabinete cuyos miembros fueron incapaces de decir *no*– se lanzó a una guerra lejana sin tener en cuenta las señales de advertencia. Como si fuera poco, los especialistas en Medio Oriente fueron ignorados y relegados; se desconoció la opinión del Ejército; los informes del Organismo Internacional de la Energía Atómica, por la inexistencia de armas de destrucción masiva, se recibieron con incredulidad y con el desprecio típico de los *neocons* hacia las organizaciones internacionales. Además, se calificaron de absurdos los cálculos que anticipaban que la guerra costaría cientos de miles de millones de dólares, y se desoyeron las advertencias de los países amigos. No obstante, la administración Bush irrumpió en la Mesopotamia. El desastre actual era predecible y lo último que podría hacer el gobierno republicano es asegurar que nunca fue advertido.

Otro golpe contra la credibilidad de la Casa Blanca sucedió con la catástrofe originada por el huracán Katrina. Si bien nadie puede discutir que fue un hecho inesperado, las indagaciones preliminares indican que sus consecuencias no fueron resultado de la mala suerte. Varios estudios del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y otros expertos avisaron que los diques de Nueva Orleans no soportarían un huracán de categoría 5. Sin embargo, los republicanos recortaron el gasto en obras de refuerzo, seguramente porque tenía cierto *aroma*: financiación pública. Para colmo –agrega Kennedy–, el caos desatado en el Golfo de México mostró a todo el mundo la imagen de un EEUU incompetente a la hora de gestionar catástrofes y, además, una sociedad injusta, en la que los negros y los pobres se encontraban todavía en el fondo del orden socioeconómico. El gobierno de Bush sufrió dos graves tropiezos en los últimos tiempos y está adquiriendo fama de ser propenso a los desastres.

“Si la administración estadounidense puede cometer tales errores en desastres que, en muchos aspectos, se predijeron y si reacciona con tanta torpeza ante las catástrofes naturales por falta de preparación, ¿con qué grado de competencia e información se llevan a cabo los procesos de decisión y los planes de emergencia en la primera superpotencia del mundo?”, concluye Kennedy. En este sentido, los políticos que se jactan y presumen de su autoridad merecen que se les exijan responsabilidades. Pero ese es un mensaje que Washington no está dispuesto a digerir en estos momentos.

**Artículo de referencia:** Paul Kennedy, “Las tribulaciones de la Casa Blanca”, en *El País*, 2 de noviembre de 2005.



# Medio Oriente, un rompecabezas difícil

**Richard Cohen, periodista de *The Washington Post*, realiza desde Jordania un repaso de la situación en algunos países de Medio Oriente, a la luz de la violencia extrema que se desencadenó en Irak.**

Entre los sueños políticos y económicos de los ideólogos de la invasión a Irak –en cuya gestación venían trabajando mucho antes de los ataques terroristas del 11-S– se contaba el de reformular el mapa político de Medio Oriente, para transformarlo en un vergel de estados democráticos con libertad de mercados para poder realizar negocios.

Dentro de este esquema, Irak sería la primera pieza de un dominó, en la fantasía *neoon* del equipo del presidente Bush, que terminaría en Siria e Irán, previo paso por Arabia Saudí y otros estados autoritarios de la región, algunos de los cuales han gozado, hasta el momento, de la silenciosa indulgencia de Washington, a pesar de la distancia cósmica que los separa de la democracia y los derechos humanos. En virtud de los resultados obtenidos hasta el momento, pocos y cada vez menos son los valientes –incluso entre las filas del propio Partido Republicano– que se animan a listar los beneficios,

por ahora intangibles, que la invasión ha traído a la región y a los Estados Unidos.

Richard Cohen, periodista de *The Washington Post*, publicó una columna desde Jordania donde hace un repaso de la situación de algunos países de la zona a partir de la situación en Irak. Cohen afirma que Jordania no está teniendo una *mala guerra*; en efecto, goza de un incremento productivo del sector de tecnología de punta, el puerto de Aqaba está más activo que nunca, contratistas de toda clase ocupan los hoteles y gran parte de los insumos y los materiales que los militares necesitan en Irak se provee desde allí.

Sin embargo –advierte Cohen–, en la zona próxima a Jordania la situación general no es tan optimista, la región se ha vuelto considerablemente menos estable desde que empezó la guerra. Y si bien es cierto que Saddam Hussein fue finalmente apresado y está siendo sometido a juicio,



las cosas van rápidamente cuesta abajo y la evolución de los países vecinos no es demasiado alentadora.

En este sentido, el caso más significativo es el de Irán, que ha extendido su influencia, si no su indiscutible control, sobre el sur iraquí, donde los chiítas son amplia mayoría y existen reservas de petróleo en abundancia. El norte iraquí, en términos funcionales, es una república kurda en la que también hay petróleo. En tanto, la zona central suní próxima a Bagdad no cuenta con riquezas petroleras y tiene una cuantiosa población decepcionada y marginada que constituye un vasto campo de potenciales reclutas para la organización terrorista Al Qaeda.

En el sur de Arabia Saudí –continúa Cohen–, donde la influencia de la organización armada de Osama Bin Laden podría estar creciendo en un número considerable, también existe una minoría chiíta. Los saudíes tampoco están contentos con una guerra que ha complicado su panorama interno y externo, y que podría comprometer la estabilidad de su propio país.

Siria es otro de los vecinos problemáticos de Jordania. El régimen dictatorial de Bashar al Assad se encuentra sometido a fuertes presiones para entregar a los asesinos del ex primer ministro libanés, Rafiq Hariri, hecho ocurrido recientemente. El problema –observa Cohen en su columna– radica en que el o los culpables podrían pertenecer a la misma familia de Assad.

En el caso concreto sirio, la preocupación de Washington no se centra tanto en la ley y el orden como en Irak, sino en la predisposición con que Assad permite a los terroristas cruzar la frontera y pasar del lado iraquí. Estados Unidos estaría predispuesto a ver la caída del régimen de Assad, pero el remedio

sería peor que la enfermedad porque no sabría qué régimen de gobierno vendría a reemplazarlo. Es difícil imaginarlo, pero podría ser algo mucho peor que el autoritarismo actual, como la organización radical de los *Hermanos Musulmanes*, por ejemplo. En este contexto, sustituir una dictadura secular por otra religiosa y fundamentalista no es aquello, precisamente, que Washington llamaría un progreso.

En síntesis –agrega Cohen–, y sin entrar en el delicado cuadro de situación del conflicto palestino-israelí, lo cierto es que difícilmente la guerra en Irak vuelva más estable a una región de por sí conflictiva en diversos momentos históricos. Así como en 1991 la Guerra del Golfo introdujo un elemento de inestabilidad en el área (la irrupción de Al Qaeda como respuesta al estacionamiento de tropas estadounidenses en Arabia Saudí), bien podría hacerlo también la actual intervención norteamericana en el país árabe.

Mientras tanto, un gran arco chiíta se está generando en la zona: Irak se encuentra fragmentado en grupos con intereses diversos e infectado de terroristas; Siria podría estar empeorando su situación actual; y Arabia Saudí no hace más que lamentarse de que los únicos ganadores de la guerra son los chiítas e Irán. Visto desde Jordania –concluye el columnista de *The Washington Post*–, parecería ser que esta guerra, que tiene pronósticos desalentadores para Estados Unidos podría ir mucho peor para la mayor parte de Medio Oriente. Entonces, ¿se puede decir *misión cumplida*?

**Artículo de referencia:** Richard Cohen, "A War Without Winners", en *The Washington Post*, 3 de noviembre de 2005.

# ¿Sucursales de Abu Ghraib y Guantánamo en Europa?

***El País* condena en su editorial el presunto establecimiento, por parte del actual gobierno de EEUU, de centros clandestinos de reclusión en países de Europa Oriental, en el marco de la guerra contra el terror.**

La violación de los derechos humanos, como un problema acuciante y vigente, vuelve a ganar las primeras planas de todos los diarios del mundo. Un ejemplo de esto ocurrió hace unos meses cuando trascendieron públicamente las prácticas aberrantes utilizadas por el ejército estadounidense en los centros de reclusión de prisioneros de Abu Ghraib y Guantánamo. Al mismo tiempo se conocía el fenómeno que algunos denominan la *deslocalización* de la tortura –también a instancias de EEUU–, una suerte de *terciarización* del *trabajo sucio* hacia países con menos escrúpulos a la hora de aplicar métodos *heterodoxos* en materia de tratamiento de prisioneros.

Días atrás el Congreso de EEUU rechazaba una iniciativa fogueada desde la vicepresidencia para legalizar la utilización de la tortura por parte de la CIA. A la inmoralidad intrínseca de la tortura, se suma el agravante que es la principal potencia del mundo quien la promueve, de la mano de un gobierno que

está despreciando un legado más que bicentenario de defensa de los valores de la libertad y la democracia.

La peor derrota que Occidente podría autoinfligirse es traicionar los fundamentos filosóficos y morales sobre los que sustentó su construcción como civilización y como sociedad. Por otra parte, como señalaba en julio el eurodiputado socialista español Emilio Menéndez del Valle en *El País*, la tortura debe ser desterrada, además, porque es obvio que los torturados que sobreviven extenderán el odio y el resentimiento contra los torturadores y sus inductores, es decir Occidente. Con estas prácticas, la *yihad* gana en popularidad y también los atentados contra civiles occidentales.

La novedad en este tema es la revelación de la existencia de centros clandestinos de reclusión de EEUU en algunos países del Este europeo, hecho que se recoge con estupor y condena desde los medios del Viejo Continente. *El País* es uno de los que publica una

columna editorial de fuerte tono crítico al respecto. Dice que la Unión Europea no debe tolerar que en su territorio haya *agujeros negros* carcelarios al margen del derecho europeo e internacional.

Según el diario español, *The Washington Post* y la organización *Human Rights Watch* avalan una información, de confirmarse totalmente, que es de suma gravedad: la CIA mantiene en detención ilegal en países europeos a supuestos terroristas de Al Qaeda, a los que probablemente somete a torturas y tratos inhumanos. Por tanto, es necesaria una investigación exhaustiva y, si se confirma, la imposición de sanciones a los países infractores, y una condena a EEUU por estas prácticas que “alimentan a los terroristas y a sus partidarios lejos de servir para eliminar esta lacra”, afirma *El País*.

*Human Rights Watch* –continúa– focalizó en Polonia, miembro de la Unión Europea, y en Rumania, aspirante a ingresar en 2007 con el tratado de adhesión firmado, entre otros estados europeos de la antigua órbita soviética, como probables territorios que albergan esas cárceles secretas, irónicamente instaladas en algunos antiguos centros de internamiento soviéticos.

“La vuelta de tuerca del horror está dada”, afirma *El País*. La CIA creó su propio archipiélago *gulag*. Desde la invasión de Afganistán a finales de 2001, la administración Bush ha estado *externalizando* las detenciones y las torturas no solo en Guantánamo, sino en países como el propio Afganistán, Egipto, Jordania y otros como Tailandia. Esto motivó la rebelión del Senado de EEUU, que aprobó por 90 votos a favor y nueve en contra una enmienda a la ley de los presupuestos militares que obliga a respetar las normas internacionales y americanas en el trato de prisioneros. Pero la Casa

Blanca amenaza con vetarla y está impidiendo que las reglas para los militares americanos se escriban según la Convención de Ginebra y las leyes contra la tortura.

*El País* señala que los hilos de este tenebroso asunto conducen de nuevo hasta el vicepresidente Dick Cheney, que quiere legalizar estos centros secretos y la tortura por agentes de información. Tras la renuncia de su Jefe de Gabinete, Lewis Libby, principal arquitecto de la política de torturas, una parte de sus funciones fue asumida por David Addington, el infame autor –según el periódico madrileño– del famoso memorándum de 2002 que pretendía legalizar estas prácticas. Y ahora se descubre que en nombre de la *guerra contra el terrorismo* exportó a Europa este horror. Algo que los europeos no deberían tolerar de ninguna manera.

Finalmente, cabría agregar que la ostensible inmoralidad de la política de la administración republicana en materia de lucha contra el terrorismo y defensa de los derechos humanos no es el único flanco expuesto a la crítica. Además, es cuestionable la consistencia de una política que en lo interno se propone reforzar la seguridad de los ciudadanos –sin entrar en consideraciones sobre los costos en materia de libertades– pero que simultáneamente, en el plano exterior, exacerba los conflictos y utiliza categorizaciones tan maniqueas y primitivas como las del terrorismo fundamentalista que combate: el discurso de la guerra de Occidente contra *el mal* como imagen invertida de la *yihad* que los fundamentalistas del Islam emprendieron contra los “infeles cruzados de Occidente”.

**Artículo de referencia:** “El ‘Gulag’ de la CIA”, *El País*, 4 de noviembre de 2005.

# La *laicidad* según Savater

**El filósofo español explica el significado de la *laicidad* en relación con el ejercicio de la ciudadanía en un Estado democrático, y esta no puede estar subordinada a ninguna condición étnica, racial, religiosa o cultural.**

Son más que tangibles los beneficios que significaron para España el fin de la dictadura franquista y el inicio de la transición, a partir de la Constitución sancionada en 1978. Más de 25 años de funcionamiento de las instituciones democráticas (cuya consolidación fue requisito indispensable para su integración a la Comunidad Económica Europea en 1986), en el transcurso de los cuales tuvo lugar un vertiginoso proceso de modernización política, económica, social y cultural, colocaron a España entre los países más desarrollados y con mejor calidad de vida del planeta.

También el proceso de modernización español guarda algunas rémoras y cuestiones sin resolver por el ordenamiento jurídico e institucional posfranquista, que hoy se constituyen en temas candentes de la agenda política. El primero de ellos tiene que ver con la cuestión territorial y el *encaje constitucional* de lo que se denominan las “nacionalidades

históricas” que alberga el Estado español: Cataluña, Euskadi y Galicia. El actual ordenamiento constitucional consagra lo que se conoce como “Estado de las autonomías” o régimen de comunidades autónomas, que los nacionalismos catalán, vasco y gallego –que aspiran a mayores niveles de autogobierno, cuando no lisa y llanamente, a la secesión del Estado español– consideran claramente insuficiente.

Por otra parte, el *encaje de la Iglesia católica* española, dentro de una sociedad que se ha secularizado en forma vertiginosa en las tres últimas décadas, sigue generando fuertes controversias cuando se tratan cuestiones que hacen a la regulación de la esfera civil (por ejemplo, el divorcio, el aborto, los matrimonios entre personas del mismo sexo, entre otros). Tiene mucho que ver en esta tensión Estado-Iglesia la redefinición del espacio eclesiástico, en virtud del lugar que durante un tiempo prolongado ocupó la Iglesia

Católica española en el entramado franquista y en lo que fuera la expresión ideológica del régimen: el nacional-catolicismo.

Por estos días, la enseñanza de religión en las escuelas tiene *en pie de guerra* a la Conferencia Episcopal Española, que se resiste a perder espacios que tradicionalmente ha considerado como propios, pero que hoy se revelan como antagónicas a la concepción de un Estado democrático moderno. Fernando Savater explica, en una columna del diario *El País*, el significado de la *laicidad* vinculada con la libertad de conciencia que requiere el ejercicio de la ciudadanía en un Estado democrático. En este contexto, el principio de igualdad que subyace a tal ejercicio no puede subordinarse a ninguna condición étnica, racial, religiosa o cultural.

En su columna del diario madrileño Savater observa que en 1791, como respuesta a la proclamación por la Convención francesa de los Derechos del Hombre, el Papa Pío VI hizo pública su encíclica *Quod aliquantum*, en la que afirmaba que “no puede imaginarse tontería mayor que tener a todos los hombres por iguales y libres”. En el mismo sentido se expresaban Gregorio XVI mediante la encíclica *Mirari vos* de 1832, Pío IX por intermedio de *Syllabus* en 1864, y León XIII en la encíclica *Libertas*, de 1888. Hubo que esperar al Concilio Vaticano II –recuerda el filósofo español– y al decreto *Dignitatis humanae personae*, pretendido por Pablo VI, para que finalmente se reconociera la libertad de conciencia como una dimensión de la persona contra la cual no valen ni la razón de Estado ni la razón de la Iglesia.

La *laicidad* se define como el reconocimiento de la autonomía de lo político y lo civil respecto de lo religioso, la separación entre la esfera terrenal de aprendizajes, normas

y garantías que todos debemos compartir y el ámbito íntimo (aunque públicamente exteriorizable a título particular) de las creencias de cada cual. La liberación es mutua –explica Savater– porque la política se sacude la tentación teocrática, pero también las iglesias y los fieles dejan de estar manipulados por gobernantes que tratan de ponerlos a su servicio, así como cesan de temer persecuciones contra su culto, tristemente conocidas en muchos países totalitarios.

Por estas razones, no tienen fundamento los temores de algunos prelados españoles que hace poco alertaban sobre la amenaza de un *Estado ateo*. Que pueda darse en algún sitio un *Estado ateo* –continúa Savater con ironía– sería tan raro como que apareciera un *Estado geómetra* o *melancólico*: pero si lo que temen tales monseñores es que aparezcan gobernantes que se inmiscuyan en cuestiones estrictamente religiosas para prohibirlas u hostigar a los creyentes, harían bien en apoyar con entusiasmo la laicidad de las instituciones, que excluye precisamente tales comportamientos no menos que la sumisión de las leyes a los dictados de la Conferencia Episcopal.

En este contexto –destaca Savater–, debe recordarse que la enseñanza no es solo un asunto que incumba al alumno y su familia, sino que tiene efectos públicos, por muy privado que sea el centro educativo en que se imparta. Una dimensión es la instrucción religiosa o ideológica que cada cual pueda dar a sus vástagos, siempre que no vaya contra leyes y principios constitucionales, y otra el contenido del temario escolar que el Estado debe garantizar con su presupuesto que se enseñe a todos los niños y adolescentes. Precisamente, en esto consiste la *laicidad* y no en otra cosa más oscura o temible.

Algunos partidarios a ultranza de la religión como asignatura en la escuela –contina Savater–, iniciaron una cruzada contra la enseñanza de una moral cívica o formación ciudadana. Al oírlos parece que los valores de los padres –cualesquiera que sean– tienen que resultar sagrados, mientras que los de la sociedad democrática no pueden explicarse sin incurrir en una manipulación de las mentes poco menos que totalitaria. En cualquier caso, la actitud laica rechaza cualquier planteamiento incontrovertible de valores políticos o sociales: el ilustrado Condorcet llegó a decir que ni siquiera los derechos humanos pueden enseñarse como si estuviesen escritos en unas tablas descendidas de los cielos.

Pero es importante que en la escuela pública no falte la elucidación seguida de debate sobre las normas y los objetivos fundamentales que persigue nuestra convivencia democrática, justamente porque se basan en legitimaciones racionales y deben someterse a consideraciones históricas. En este sentido, los valores no dejan de serlo y de exigir respeto, aunque no aspiren a un carácter absoluto.

Sin embargo, el laicismo va más allá de proponer una cierta solución a la cuestión de las relaciones entre la Iglesia (o las iglesias) y el Estado. Es una determinada forma de entender la política democrática y también una doctrina de la libertad civil. Consiste en afirmar la igual condición de todos los miembros de la sociedad, definidos exclusivamente por su capacidad similar de participar en la formación y expresión de la voluntad general y cuyas características no políticas (religiosas, étnicas, sexuales, genealógicas, entre otras) no deben ser, en principio, tomadas en consideración por el Estado. De modo que, en términos puros, el

laicismo va unido a una visión republicana del gobierno.

Además, Savater pone de manifiesto el choque de la perspectiva laica con la concepción nacionalista, pues no hay nación de naciones ni Estado de pueblos, sino nación de ciudadanos, iguales en derechos y obligaciones fundamentales, más allá de cuál sea su lugar de nacimiento o residencia. La justificada oposición a las pretensiones de los nacionalistas que aspiran a disgregar el Estado español o, más frecuentemente, a ocupar dentro de él una posición de privilegio asimétrico se basa –desde el punto de vista laico– no en la amenaza que suponen para la unidad de España como entidad trascendental, sino en que implican la ruptura de la unidad y de la homogeneidad legal del Estado de Derecho. Fundamentalmente, porque no es lo mismo ser culturalmente distintos que políticamente desiguales.

En todo caso, la época no parece favorable a la *laicidad*, reflexiona el filósofo español. Las novelas exitosas actuales tratan de evangelios apócrifos, profecías milenaristas, sábanas y sepulcros milagrosos, templarios y batallas de ángeles contra demonios. Quizás el primer mandamiento de la *laicidad* consista en romper la idolatría culturalista y fomentar el espíritu crítico respecto de las tradiciones propias y ajenas. Savater concluye con palabras del filósofo hispano-estadounidense George Santayana (1863-1952): “No hay tiranía peor que la de una conciencia retrógrada o fanática que oprime a un mundo que no entiende en nombre de otro mundo que es inexistente”.

**Artículo de referencia:** Fernando Savater, “La laicidad explicada a los niños”, en *El País*, 5 de noviembre de 2005.

# Lo que ya no esconde la violencia en Francia

**Josep Ramoneda analiza los hechos que sacuden a Francia, desde la perspectiva de la crisis del Estado social, que cuestionan el modelo de integración y revelan la deserción de un Estado cautivo de la lógica del mercado.**

Los episodios de violencia que comenzaron en París hace once días, que azotan a toda Francia con conatos de contagio a otros países europeos, constituirían el tercer capítulo de una saga donde el tema central es el fracaso de las naciones desarrolladas –orgullosas del modelo y los valores que creían encarnar– en la construcción de sociedades más justas e integradoras.

Así como los atentados de julio en Londres pusieron en evidencia el fracaso del modelo multicultural británico de integración de las minorías, y la desolación que dejó el huracán Katrina en las costas de Nueva Orleans y Luisiana mostró las profundas inequidades del modelo de acumulación estadounidense, las revueltas que se originaron en Francia manifiestan *la crónica de un colapso anunciado* y la incapacidad de la República gala para garantizar el principio de la igualdad entre sus ciudadanos.

Son tres episodios que interrogan el rumbo que el capitalismo adoptó en las últimas décadas y sobre las tensiones del Estado democrático, cuyas dificultades para conciliar el ejercicio de la ciudadanía con crecientes niveles de exclusión e inequidad son cada vez mayores.

El filósofo y periodista español, Josep Ramoneda, analiza en *El País* los hechos que sacuden a Francia desde la perspectiva de la crisis del Estado social que –incapaz de brindar bienestar a los ciudadanos– procura legitimarse mediante la *seguridad*, un valor funcional a los requerimientos económicos actuales. No solamente el modelo francés de integración está en discusión, sino la deserción de un Estado cautivo de la lógica del mercado.

Para Ramoneda la globalización otorgó al poder económico la capacidad normativa en lo jurídico y en lo moral. La ley del mercado se convirtió en un territorio autónomo sobre el que los gobiernos dejan de actuar, ya sea por impotencia o por hegemonía ideológica.



Es un proceso lento que empezó en los años 70, al final de las tres décadas del bienestar europeo. El Estado se apartó de las responsabilidades económicas y renunció a compensar los efectos colaterales de la lógica del mercado. Esta ausencia amenazaba con debilitar su autoridad: ¿sirve el Estado –pregunta Ramoneda– si no puede protegernos de un sistema económico inestable, que se llevó por delante las fronteras y los valores que componían nuestros marcos de referencia?

En una globalización por concentración caracterizada por la aglomeración de ciudadanos en grandes espacios urbanos, no hay territorios vacíos donde mandar a los *residuos humanos* que genera todo orden social. En este contexto, el Estado descubrió en la seguridad la legitimación perdida al dejar de cumplir la demanda de los ciudadanos como Estado social.

Según Ramoneda, “del Estado social estamos pasando al Estado penal, un modelo, por otra parte, ya ensayado en EEUU y del que Europa siempre había querido desmarcarse. Con la seguridad en el centro del discurso político –en un retorno a la idea *hobbesiana* de Estado– todas las disputas por el poder pasan por este punto”.

La estrategia de Chirac para derrotar al socialista Jospin en las últimas elecciones presidenciales consistió en presentar a la izquierda como demasiado tolerante. Chirac ganó las elecciones, pero Le Pen pasó al ballotage. Ante el ascenso de la ultraderecha, cundió la alarma y las noticias de violencia y delincuencia desaparecieron de los noticieros. Pero la extrema derecha consiguió que los partidos políticos instalaran su agenda. Ahora la seguridad vuelve a la pugna por la herencia *chiraquiana*, entre el ministro del interior Nicolás Sarkozy y el primer ministro Dominique de Villepin.

Si la seguridad es el único horizonte del Estado no es extraño que la violencia aparezca como respuesta de los márgenes. Es una manera de existir, de salir en el noticiero, que es lo que da carta de naturaleza en la sociedad mediática. Con sus acciones estos jóvenes buscan integrarse en el panorama francés. El nihilismo es una manera de estar en una sociedad que prefiere ignorarlos y que los reconoce cuando queman coches.

Cuando esto ocurre, emerge el lado oscuro de la República: el racismo de Estado. La dificultad para integrar a los inmigrantes de segunda y tercera generación demuestra la tendencia de las sociedades a desconocer problemas que llevan años configurándose. El racismo cotidiano está extendido: magrebíes y subsaharianos llevan la peor parte. Los problemas de clase se duplican con los de origen, y la penalización es doble: por pobres, por su piel, sus nombres y apellidos.

Los procesos de cambio que trajo la globalización acentúan el desamparo del individuo que perdió el marco natural de su biografía: un trabajo, una cultura, etc. Entramos en un mundo de *ciudadanos a la intemperie*.

La combinación de la renuncia paulatina del Estado a intervenir en la economía para paliar las desigualdades, de la pérdida de referencia identitaria porque cambiaron los parámetros de existencia, y del movimiento constante de ciudadanos en busca de futuro augura que lo ocurrido en estos días solo es un ensayo. La paradoja de esta situación es que el Estado actual necesita estos conflictos para legitimarse como Estado penal, es decir, para reforzarse a costa del miedo de los ciudadanos.

**Artículo de referencia:** Josep Ramoneda, “Del Estado social al Estado Penal”, en *El País*, 8 de noviembre de 2005.

# ¿Falla la igualdad?

**Según Olivier Roy, la violencia desatada recientemente en Francia es como un síntoma de una dolencia que aqueja a Occidente. Además, percibe que estos hechos tienen poco que ver con el fundamentalismo religioso.**

La violencia que hostiga a Francia establece una muestra más de las dificultades y limitaciones que acusa el Estado social para integrar al creciente número de los excluidos por la lógica de un mercado todopoderoso. No se trata de una especificidad francesa, ni de la problemática de integración de las minorías culturales, étnicas o religiosas en sociedades a la diversidad. Refiere quizás a una dinámica cuya naturaleza expulsiva se transformó en una característica intrínseca del modelo, y que pone en tensión el funcionamiento del Estado democrático.

En este contexto, la participación política y la práctica de las responsabilidades cívicas podrían ser insuficientes para el ejercicio de una ciudadanía plena; una ciudadanía que encuentra su integridad solo cuando el ciudadano es capaz de contribuir, mediante el trabajo, a la generación de riquezas de la sociedad. Por el contrario, si el derecho a la participación política y comunitaria solo viene

acompañado de exclusión social, el resultado podría ser una *ciudadanía renga*, presa fácil de la frustración, la pérdida de compromiso o la furia y la violencia *sin ideología* contra la comunidad y sus fallidas instituciones, como se puede ver en Francia por estos días.

*The New York Times* publicó una columna de Olivier Roy, Director de Investigación del Centro Nacional Francés para Investigaciones Científicas y autor del libro *Globalised Islam. The search for a new ummah*, quien ve en los sucesos de Francia los síntomas de una dolencia que aqueja a todo Occidente. Dice Roy que no hay nada particularmente musulmán, o incluso francés, en la violencia desatada.

Roy destaca dos características de las escenas de violencia. La primera es que se trata de revueltas de jóvenes varones que tienen entre 12 y 25 años. Pero incluso los adultos, que se mantuvieron al margen y son las primeras víctimas del caos, rechazan la innecesaria

brutalidad de la policía y la demonización que hizo la prensa de sus comunidades. En segundo lugar, las acciones violentas son social y geográficamente localizadas. Hay un fuerte sentimiento de identidad territorial entre los jóvenes de esos barrios, que se juntaron para formar bandas independientes. Cada una de estas pandillas, a menudo involucradas en actos de delincuencia menor, son reacias a mostrarse lejos de sus territorios y mantuvieron alejados a bandas rivales, policías, bomberos o periodistas.

Estos jóvenes son la expresión de una furia cocinada a fuego lento, alimentado por el desempleo y el racismo. La lección de esto –afirma Roy– radica en que si bien los incidentes se originaron en zonas habitadas por inmigrantes musulmanes, poco tienen que ver con la ira de esta comunidad en particular.

Francia tiene una enorme población musulmana viviendo fuera de estos barrios, que no se siente identificada con los revoltosos. Aún dentro de las áreas violentas –explica el columnista francés–, es la propia identidad barrial lo que prevalece sobre las filiaciones étnicas o religiosas. La mayoría de los manifestantes es segunda generación de inmigrantes, tiene nacionalidad francesa y se ve como parte de la moderna subcultura suburbana de Occidente.

Desde la perspectiva de Roy, nadie debería sorprenderse que los esfuerzos del gobierno por encontrar *líderes comunitarios* hayan tenido poco éxito. No hay líderes por una sencilla razón: no existe en los barrios tal comunidad. El control tradicional de los padres desapareció y muchas familias musulmanas son monoparentales. Son los mismos jóvenes quienes imponen las reglas del lugar, basadas en un machismo agresivo, el control de las calles y la defensa de su territorio.

Los jóvenes franceses no luchan por su reconocimiento como minoría étnica o religiosa –explica Roy–; reclaman ser aceptados como ciudadanos plenos. Creyeron en el modelo francés de la integración individual mediante la ciudadanía, pero se sienten defraudados por su exclusión económica y social. Por eso destruyen aquello que perciben como instrumentos de una fallida promoción social: escuelas, oficinas de bienestar social y gimnasios.

Para Roy, contrariamente a la demanda de progresista, un mayor énfasis en el multiculturalismo y en el respeto a las culturas diferentes no es la respuesta que esta población joven y furiosa está demandando, pues tiene un alto grado de *desculturación* e *individuación*. No existe ninguna referencia a Palestina o a Irak en las revueltas y los fundamentalistas estuvieron ausentes de los actos de violencia, además no comparten la *agenda* de estos jóvenes.

¿Qué debe hacerse entonces? Los políticos ofrecieron lo predecible: toque de queda, perogrulladas sobre el respeto y vagas promesas de ayuda económica. Pero con Francia plenamente sumergida en el ciclo de la elección presidencial, cualquier esperanza de replanteo parece remota. Por último –concluye Roy–, estamos tratando con problemáticas propias de cualquier cultura, que con sus diferencias y junto con la inequidad confrontan con los ideales, como en el caso de Francia, que esa sociedad reivindica como parte de su tradición. Por tanto, la lucha por integrar a las subclases enfurecidas es un desafío que atraviesa a todo el mundo occidental.

**Artículo de referencia:** Roy, Olivier, "Get French or Dye Trying", en *The New York Times*, 9 de noviembre de 2005.

# Sindicalismo menguante

**El filósofo español José Vidal-Beneyto analiza en *El País* las causas del ocaso de las organizaciones sindicales europeas, en el contexto de las agudas transformaciones del capitalismo globalizado.**

Uno de los rasgos salientes de las últimas décadas en las democracias occidentales tiene que ver con el debilitamiento de las organizaciones sindicales y el eclipse del protagonismo obrero en la mesa de las decisiones económicas y políticas. Son varios los factores que socavaron el poder de negociación sindical, sobre todo desde hace treinta años. El cambio tecnológico vertiginoso hizo de la mano de obra un factor redundante en vastos sectores de la producción y de los servicios. La mayor movilidad del capital y, por consiguiente, la *deslocalización* de empresas hacia regiones o países con costes laborales sensiblemente más bajos también tuvo una alta incidencia.

Además, el desempleo estructural y la conformación de un amplio sector social que ha pasado más tiempo de su vida laboral cobrando subsidios de desempleo que trabajando, también hizo mella en lo que fue una cultura de la sindicalización muy arraigada desde la segunda posguerra hasta principios de los

años 80. Tanto en los países desarrollados como en los *en vías de desarrollo*, las organizaciones sindicales cumplían una función clave como canalizadores del conflicto social.

No es extraño –independientemente del escenario geográfico– que la conflictividad social adquiriera visos de tornarse anárquica, con más protestas que reivindicaciones y poco dispuesta a dejarse conducir por actores u organizaciones sociales tradicionales. En este contexto, y a diferencia de los años del capitalismo incluyente, es posible que a las organizaciones sindicales se les escape una porción mayoritaria de la representación social.

Este tema aborda el filósofo y periodista español, José Vidal-Beneyto, en una columna para *El País*, donde describe las causas del ocaso sindical. Dice Vidal que la renuncia a la participación y la desafección –cuando no el rechazo– a la acción colectiva, hoy alcanzaron su cenit en el mundo sindical. Varios son los

elementos intervinientes en tal degradación: la *financiarización* de la actividad económica y la consecuente disminución del empleo en la economía productiva; la intensificación de la competencia y la *deslocalización* empresarial; la reducción del sector público, soporte fundamental de la sindicalización; y el desarrollo tecnológico, con cambios tan fundamentales como la digitalización y las telecomunicaciones, y su extraordinaria capacidad sustitutoria del trabajo humano.

Cuando la mano de obra era esencial para la creación de riqueza y en el proceso productivo –explica Vidal–, el trabajador era uno de sus componentes más determinantes y resultaba imposible obviar el mundo laboral. Marx describió la relación indisoluble entre capital y trabajo e hizo de las fuerzas organizadas de este último el gran vector de la transformación social. Sin embargo, los procesos de globalización y el aumento de la movilidad del capital que se derivó de ellos generaron una gran inestabilidad en el mercado global de la mano de obra y las empresas buscaron las localizaciones de salarios más bajos, produciendo una imparable espiral descendente.

Todo esto –agrega el filósofo español– produjo un importante declive de los niveles de sindicalización. Los datos de la OIT revelan que la proporción de trabajadores sindicalizados en el mundo se redujo a la mitad entre 1985 y 1995.

A finales del siglo XIX –continúa Vidal–, la internacionalización del comercio y de la industria llevó a la aparición de un sindicalismo obrero de base internacional simultáneamente con la formación de los partidos socialistas. Por el contrario, hoy la mundialización ha llevado a la triste situación de que las normas de la OMC tengan valor obligatorio frente al carácter puramente incitativo

de las de la OIT, en un momento en el que las fuerzas del trabajo parecen alejarse de la opción *metanacional*.

En el Viejo Continente, esto se manifiesta de forma clara en la indiferencia y rechazo de las clases populares por la construcción europea, puesta de relieve en sendos referéndum celebrados en Francia y Holanda en este año, y en los cuales los obreros se pronunciaron masivamente en contra del proyecto constitucional.

En este contexto, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) –que agrupa a 73 sindicatos de 34 países con más de 60 millones de afiliados– es uno de los pocos instrumentos de los que todavía dispone el sindicalismo europeo. Sin embargo, su condición de sindicato de representación y negociación, mucho más que de movilización y combate, no le permite resistir a la presión de los *lobbies* y de las grandes empresas.

Desde la perspectiva de Vidal, eso explicaría que la CES no haya logrado incluir el tema de las remuneraciones en la agenda comunitaria y que no se le deje participar en las decisiones relativas a las políticas macroeconómicas y monetarias. Las alternativas que le quedan a la CES, y que podrían extrapolarse a las organizaciones sindicales en general, pasan por reclutar nuevos miembros, en especial en el sector de la economía informal; ofrecer servicios para la búsqueda de empleo; promover la acción internacional; y buscar alianzas con el sector terciario y las ONG ciudadanas. En cualquier caso –concluye Vidal–, sin sindicatos europeos no puede existir una Europa cabal.

**Artículo de referencia:** Vidal-Beneyto, José, “La implosión sindical”, en *El País*, 5 de noviembre de 2005.

# Menos libertad por menos seguridad

**Las libertades individuales sufrieron un retroceso luego de los atentados del 11-S. Timothy Garton Ash indaga esta problemática en países modelos de la democracia occidental: EEUU, Gran Bretaña y Francia.**

Pocos dudan del deterioro que los derechos humanos y las libertades individuales sufrieron en Occidente a partir de los atentados terroristas del 11-S. La respuesta de algunos gobiernos al terrorismo fundamentalista está provocando un retroceso en la normativa que plasma los valores que las sociedades defienden desde la Ilustración. El acotamiento de libertades que significó la aprobación de los *patriot act* en EEUU, las últimas iniciativas del gobierno de Tony Blair para reformar la legislación antiterrorista, el endurecimiento de la legislación antidisturbios en Francia y las reglamentaciones que restringen las posibilidades de ingreso y movilidad de los extranjeros en Europa son indicadores de un mundo que resigna espacios de libertad en aras de una seguridad que, día tras día, aparece más amenazada y endeble.

Si este es el mundo más seguro que prometían los ideólogos de la *guerra contra el*

*terror* al justificar la invasión a Irak, los resultados están a la vista y los ciudadanos de Occidente vieron deteriorarse dos atributos esenciales de la democracia liberal: la libertad y la seguridad.

Timothy Garton Ash analiza en *The Guardian* el retroceso, en materia de libertades, que sufren los tres países que son paradigmas de la democracia: EEUU, Gran Bretaña y Francia. Según Garton Ash, pocas palabras resumen los años transcurridos desde el 11-S: *erosión de la libertad*. En efecto, contemplamos el desgaste de las libertades en la mayoría de las democracias más estables. Precisamente, los terroristas de Al Qaeda pretenden que ellas reaccionen desorbitadamente y revelen su “verdadera cara opresiva”. “En el siempre difícil balance entre libertad y seguridad, estamos errando mucho para el lado de la segunda. Peor aun, como resultado de este error nos estamos volviendo mucho menos seguros”, sostiene el columnista.

Los últimos 30 años fueron testigos de una difusión extraordinaria de las libertades; desde Grecia, España y Portugal, pasando por América latina, Filipinas y Europa Central hasta Sudáfrica. Posteriormente, se produjo el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, y entonces, a la vez que luchamos por dar respuesta a una amenaza real, estamos en franco retroceso.

Cuando el mismo 11-S le recordaron las restricciones de la ley internacional, George W. Bush afirmó: “no me importa lo que digan las leyes internacionales, algún *traseo* vamos a patear”. Esto no significó solo la invasión a Irak, sino también Abu Ghraib, Guantánamo y, probablemente, otras prisiones secretas donde torturar gente. El vicepresidente Dick Cheney está tratando de exceptuar a la CIA de un proyecto de ley aprobado por el Senado que prohíbe la tortura por parte de todas las fuerzas y agencias estadounidenses. En el plano interno, las famosas *Leyes Patrióticas* permiten invasiones rutinarias a la privacidad y recortes a las libertades civiles.

Gran Bretaña –continúa Garton Ash–, sigue el mismo derrotero. Después de la invasión justificada a Afganistán, intentó darle legitimidad a la injustificable invasión de Irak. En el plano doméstico –sigue–, presenciamos endurecimientos de la legislación antiterrorista, o sucesivas erosiones a las leyes sobre derechos humanos y a las libertades individuales.

Mientras tanto, Francia extendió la aplicabilidad del estado de emergencia desde los 12 días que marcaba originalmente la ley a 3 meses. La causa directa es diferente que en el Reino Unido y EEUU, pero también el efecto es la erosión de las libertades. El columnista británico también considera la aprobación de la *ley del velo* como un hecho de alto valor

simbólico en el recorte de las libertades individuales.

Garton Ash reconoce que siempre es necesario sacrificar algunos bienes públicos en favor de otros, y que el balance entre libertad y seguridad es uno de los básicos en política. Los totalitarismos del siglo xx prometían seguridad a cambio de una libertad acotada. En las democracias liberales, por lo general, aceptamos menos seguridad a cambio de una libertad más amplia. Enfrentados a la amenaza de los *ihadistas* suicidas, debemos reconsiderar y quizás hacer ajustes en ese balance, admite el columnista. Pero así y todo, siempre necesitamos que nos convenzan de que la reducción de la libertad nos traerá un aumento equivalente de nuestra seguridad personal.

De todos modos, resulta imperdonable aquellas decisiones que nos hacen a la vez menos libres y menos seguros, y últimamente hemos tenido demasiado de eso: acciones destinadas a prevenir ataques suicidas que terminaron multiplicándolos. El mayor desafío de la seguridad en Occidente después del 11-S radica en crear las condiciones para evitar que la gente se transforme en terrorista suicida.

Muchas lecciones nos dejó el siglo xx, concluye Garton Ash. Ninguno de los asesinatos secretos de la CIA, ni siquiera sus trucos sucios permitieron ganar la guerra fría. Por el contrario, fue el magnético ejemplo de sociedades libres, prósperas y sometidas únicamente al imperio de la ley. Eso valió más que miles de bombas atómicas o bombarderos fantasma. Ningún arma conocida por el hombre es más poderosa que la libertad en el marco de la ley.

**Artículo de referencia:** Garton Ash, Timothy, “The forward march of liberty has been halted, even reversed”, en *The Guardian*, 17 de noviembre de 2005.



# ¿Aires de cambio en Israel?

**El triunfo de Amir Peretz abre nuevas perspectivas en Israel y en el conflicto con los palestinos. Jonathan Freedland describe este escenario que pone fin a la vieja guardia del laborismo de Shimon Peres.**

El asesinato del ex primer ministro laborista Yitzhak Rabin hace diez años, a manos de un extremista de la derecha religiosa israelí, representó el fin de la ilusión que había despertado en Medio Oriente –y en el mundo entero– el proceso de paz puesto en marcha en Oslo con los tratados de 1993. Esto fue el anticipo de la radicalización de la derecha religiosa judía y de los grupos terroristas palestinos como *Hamas* y la *Jihad Islámica*. Una dinámica donde los moderados perdieron su espacio político y la violencia volvió a golpear a uno y otro lado.

Luego del fracaso del proceso de paz, y frente a las expectativas despertadas por la instancia negociadora patrocinada por EEUU pocas piezas parecían moverse en el panorama político israelí que pudieran echar sombras sobre la hegemonía que mantiene el derechista partido Likud, bajo el liderazgo de Ariel Sharon. Tampoco parecía demasiado comprometido el acompañamiento que realizaba el Partido

Laborista –de orientación socialdemócrata–, bajo la dirección del histórico Shimon Peres, como parte de la coalición de gobierno.

Dice al respecto Jonathan Freedland, columnista de *The Guardian*, que a pesar de que en Israel el sentimiento más perceptible es el pesimismo, los últimos días trajeron una brisa de optimismo difícil de resistir. Los méritos de este optimismo se los lleva un hombre que revitalizó el campo israelí en favor de la paz. Se trata de Amir Peretz, un líder sindical de origen marroquí que dedicó su vida a luchar contra la pobreza, y que se convirtió inesperadamente en el nuevo líder del Partido Laborista israelí.

Algunos hablan incluso de *revolución* en la política de Israel, de una nueva “Peretztroika”. Lo cierto es que la izquierda israelí está aclamando la llegada del nuevo líder como la primera buena noticia desde el colapso del proceso de paz de Camp David hace cinco años. La posición de Peretz sobre el conflicto

con los palestinos es uno de los motivos de algarabía. Desde hace dos décadas, Peretz viene abogando por un Estado palestino. Y llama al fin del *unilateralismo* de Sharon y a la búsqueda de una paz negociada directamente con los palestinos.

Incluso se atreve a hablar de un retorno a la “senda de Oslo”, lo cual requiere de valentía en un país donde a los arquitectos de los acuerdos de 1993 se los llama los “criminales de Oslo”. La elección supone una ruptura con la política mantenida hasta el momento por el saliente líder del partido, Shimon Peres, quien convirtió al Laborismo en una *pata trasera* de la coalición nacional liderada por el Likud. Esto se rompió con la llegada de Peretz: el Laborismo se va de la coalición de gobierno y el actual primer ministro tendrá que convocar a elecciones.

Pero hay más que posturas electorales en el discurso de Peretz. En los actos de homenaje a Rabin hizo un llamado por una “hoja de ruta moral”, cuya guía sea el “respeto por la dignidad humana”. Desde su perspectiva, el régimen impuesto por Israel sobre los palestinos está teniendo también un costo moral para los israelíes. “Una hoja de ruta moral terminará con la ocupación y permitirá alcanzar un acuerdo permanente”, dijo Peretz antes de invocar a Martin Luther King diciendo que él también tenía un sueño, y que consistía en que algún día los niños palestinos e israelíes pudieran jugar juntos y construir un futuro común.

Son varias las razones que para Freedland permiten abrigar la esperanza que esta vez las cosas pueden ser diferentes. Peretz proviene del “segundo Israel”, conformado por judíos con raíces en el mundo árabe o musulmán, los que en el argot se denominan como *mizrachim*. Este sector de la población es

pobre y muchos abrigan un resentimiento por la discriminación a la que son sometidos por parte los judíos centroeuropeos –o *ashkenazim*– del Partido Laborista, quienes condujeron los destinos del Estado.

En Israel el partido de izquierda, el Laborismo, captó los votos de las elites educadas, en tanto que los pobres y desfavorecidos optaron por el Likud. Con Peretz esta lógica se invirtió.

Todos estos quiebres producen una apertura de la política israelí y renuevan la línea que separa a la izquierda de la derecha, explica Freedland. Ello pone fin al *consenso desgano* que caracterizó al período post Camp David. Peretz se presenta como una clara alternativa al *thatcherismo* y neoliberalismo económico de Sharon, que tuvo un alto costo social y sumergió en la pobreza a un gran número de israelíes. Al mismo tiempo, se instala como la alternativa realista a Sharon en el conflicto con los palestinos: un acuerdo negociado o más de lo mismo. En este sentido, el nuevo líder laborista sostiene que los gastos de defensa y de la ocupación desviaron demasiado dinero y que los recursos gastados en los asentamientos deben redireccionarse hacia los pobres de Israel: porque “la seguridad económica es parte de la seguridad nacional”.

¿Tendrá éxito?, concluye Freedland. Peretz no es un soldado, en un país que tiende a elegir generales como líderes. Las apuestas vuelven a serle contrarias. “Pero Peretz ya las ha desafiado otras veces, y todos los que anhelan la paz en Medio Oriente deberían rezar para que las vuelva a desafiar”.

**Artículo de referencia:** Freedland, Jonathan, “The man who could bring about a revolution in Israeli politics”, en *The Guardian*, 16 de noviembre de 2005.

# Apuntes sobre la educación estadounidense

**Brent Staples advierte en *The New York Times* sobre el alarmante rezago de la educación de EEUU respecto de sus principales competidores y de su escasa permeabilidad para adoptar fórmulas exitosas en otros países.**

En la sociedad del siglo XXI marcada por el signo de la revolución científico-tecnológica, la centralidad del desarrollo está en el conocimiento y, por lo tanto y fundamentalmente, en la educación. Desde un punto de vista estrictamente económico, dicha centralidad está determinada por la circunstancia que tanto la educación como el conocimiento pasaron a ser –bajo la óptica del capitalismo globalizado– la fuerza motriz y el eje de la transformación productiva y el desarrollo económico.

No obstante, y especialmente en contextos tan particulares como el de América latina –marcados por fuertes inequidades sociales–, la educación constituye, además, uno de los principales mecanismos para revertir y evitar la reproducción en el tiempo de las grandes desigualdades que dejaron los años 80 y 90.

En tanto, entre los países más desarrollados la definición de un proyecto educativo adecuado al nuevo contexto globalizado

constituye un requisito indispensable y una condición *sine qua non* para seguir jugando como potencia en la esfera económica y, en especial, en el plano cultural y científico. En este sentido, EEUU se juega en la actualidad su lugar central como primer superpotencia mundial.

En relación con este tema, Brent Staples, Doctor en Psicología por la Universidad de Chicago, advierte desde una columna en *The New York Times* sobre el alarmante rezago de la educación estadounidense respecto de sus principales competidores en la carrera por el conocimiento y el desarrollo científico. Además, opina sobre la escasa permeabilidad de los estadounidenses para aceptar y probar aquellas fórmulas que tuvieron resultados exitosos en otros países.

Por lo tanto, EEUU será una potencia económica de segundo orden –observa Staples– si no es capaz de alcanzar la *performance* educativa de sus rivales, y si no consigue además

elevant el nivel de sus estudiantes en el campo de la matemática, la lengua y las ciencias. A pesar de que no haya líder político, empresario o educador que no sea consciente de ello, el país no cuenta aún con un plan nacional destinado a alcanzar esta meta en materia educativa.

Como si fuera poco –agrega el especialista–, los estadounidenses se han mostrado abiertamente hostiles a la idea de importar estrategias de aquellos países que los han superado en la arena educativa. Asimismo se suponía que la ley conocida como “*Ningún chico rezagado*”, aprobada cuatro años atrás, colocaría este problema en las discusiones de la agenda nacional de las administraciones estadounidenses.

Sin embargo, el país terminó empantanado en la pelea sobre la prueba anual que la ley introduce para los primeros grados, con el objetivo de asegurar que los diferentes estados logren achicar las brechas y las disparidades en materia de logros educativos. El debate sobre la evaluación de la educación se recalentó por estos días cuando los resultados nacionales en matemática y lengua mostraron resultados muy sombríos en todo el país.

Para empezar el análisis, Staples considera que hay dos temas sumamente importantes y estrechamente entrelazados alrededor de los malos resultados de la evaluación y a los cuales EEUU todavía no ha prestado la atención necesaria. El primero tiene que ver con cómo se capacita a maestros y a profesores, mientras que el restante consiste en cómo estos enseñan lo que enseñan. Estos puntos –observa el columnista– son objeto de gran atención en los sistemas de más alto rendimiento, en especial en Japón, que ya se ubica a años luz de EEUU en las comparaciones internacionales.

En general –dice Staples–, los norteamericanos tienden a hacerse los distraídos cuando les sacan a relucir las comparaciones con el caso japonés. La respuesta más habitual es que “la cultura japonesa poco tiene que ver con la nuestra”. Sin embargo, el sistema japonés presenta algunas características que podrían ser imitadas en EEUU con resultados muy provechosos (en este sentido, cita Staples a los reformadores educativos James Stigler y James Hiebert, autores del libro *The Teaching Gap*, publicado en 1999).

En la estrategia japonesa de desarrollo docente –continúa–, los maestros trabajan intensa y cooperativamente para mejorar sus métodos. Este proceso, conocido como *lesson study*, permite a los maestros revisar y *refinar* sus clases, que luego serán compartidas con los demás pares, algunas veces mediante videos y otras en convenciones.

Además de apoyar a los docentes más noveles, este sistema construye un cuerpo de conocimientos de acceso público sobre aquellos temas y actividades que mejor funcionan en clase. Los grupos de *lesson study* se centran en el refinamiento de métodos que mejoren la comprensión de los alumnos. Trabajan paso a paso, diseñando estrategias exitosas para enseñar lecciones específicas. Este método –agrega Staples– refleja la visión japonesa de que una enseñanza exitosa es producto del desarrollo intensivo y del auto-examen de los docentes.

En EEUU, por el contrario, los nuevos maestros tienen pocas oportunidades durante su carrera de observar en acción a otros colegas exitosos. Además, existe la tendencia a creer que el cambio educativo puede hacerse de la noche a la mañana con solo encontrar la fórmula acertada. “Eso nos hace presa de modas pasajeras que terminan poniendo a las

escuelas en el camino equivocado”, advierte el columnista.

Existen otros dos factores, según Staples, que dejan a EEUU fuera de carrera respecto de otros países con alta *performance* en educación. Uno tiene que ver con el sentimiento estadounidense de que la enseñanza es una habilidad que la gente adquiere naturalmente. El otro refiere a la gran variedad de currículas según los diferentes estados.

Los países que están aventajando a EEUU en matemática y en ciencia deciden en el ámbito nacional lo que los alumnos deberían aprender y cuándo deberían hacerlo. Las escuelas son supervisadas normalmente por ministerios de educación, que dedican gran parte del tiempo a lo que podría denominarse como *control de calidad educativo*.

En el país del norte, contrariamente, existen 50 tipos de estándares para la misma cantidad de estados diferentes y, aun dentro de cada Estado, la calidad de la educación depende enormemente del barrio donde vive el estudiante. Con la instrumentación de la evaluación anual, la Ley *Ningún chico rezagado* intentó solucionar este problema mediante la penalización de aquellos estados que no lograran mejorar la *performance* de sus estudiantes.

Sin embargo, los estados se las ingeniaron para *esquivar* la ley estableciendo estándares muy bajos y diseñando evaluaciones estatales sencillas. El fraude de esta estrategia –señala Staples– quedó claramente en evidencia cuando los estados que habían tenido muy buenos resultados en sus propias evaluaciones terminaron con resultados desfavorables en la evaluación alternativa, más rigurosa, conocida como Evaluación Nacional del Progreso Educativo (*National Assessment of Education Progress*).

La Ley antedicha –explica el columnista– se basó en la premisa de que la conjunción de resultados embarazosos y sanciones gubernamentales terminaría forzando a las escuelas a mejorar los resultados educativos de todos los estudiantes. Lo que ha quedado claro, por el contrario, es que los sistemas escolares y los institutos de educación no tienen idea de cómo generar aquellos cambios en la enseñanza que permitan, efectivamente, a los estudiantes aprender más. De este modo, y enfrentados a resultados bajísimos en la evaluación, algunos directivos escolares han abrazado la peligrosa visión –demasiado extendida– de que millones de chicos son, en realidad, incapaces de afrontar un aprendizaje de alto nivel.

En Japón, afirma Staples, eso sería una herejía, mientras que en el sistema educativo estadounidense –diseñado en el siglo XIX para brindar una rigurosa educación a tan solo un quinto de los estudiantes y derivar al resto al trabajo rural y fabril que hoy ya no existe– esa idea cuenta todavía con un fuerte arraigo.

Entonces, EEUU necesitará una actitud radicalmente diferente para hacer frente a sus competidores altamente preparados, concluye el columnista de *The New York Times*. Para los que empiezan su carrera docente, será necesario centrarse, como nunca antes, en el proceso mediante el cual se enseña a los maestros a enseñar. “Necesitaremos deponer la arrogancia y la xenofobia que nos han cegado a los modelos exitosos desarrollados en otros lugares del mundo”.

**Artículo de referencia:** Staples, Brent, “Why the United States should look to Japan for better schools”, en *The New York Times*, 21 de noviembre de 2005.

# Más sobre la crisis social en Francia

**Las revueltas juveniles francesas continúan en primer plano. José Vidal-Beneyto observa una secuencia histórica con hechos similares ocurridos en países desarrollados donde la exclusión es parte del *paisaje* social.**

Las voces que sostienen la necesidad de acabar con el Estado social europeo surgido de la segunda posguerra se hacen oír con más fuerza, en razón de la ineficiencia y de la pesada carga que supone para las fuerzas del mercado y para el logro de una economía competitiva. Frente a esto, los sucesos en Francia ponen en evidencia lo que ocurre cuando se descuida el costado social del Estado.

El modelo europeo se caracterizó por ser la experiencia más exitosa de convivencia entre el capitalismo y el bienestar general de la población. Pero si las políticas de equidad y de promoción social terminan subordinadas sin matices a las prioridades del mercado, el resultado es lo que presenciamos en Francia.

En este sentido, se pone de manifiesto que la competitividad económica no puede alcanzarse a costa de la armonía social. Precisamente, ese fue el gran mérito del Estado benefactor: mantener el precario equilibrio

entre ambos componentes de la ecuación. ¿Es posible restaurar ese equilibrio en el marco de un capitalismo sin contramodelos ni limitaciones? ¿Es sustentable un Estado democrático que priorice la salud del mercado por sobre la de la sociedad civil?

En relación con este tema, el periodista español José Vidal-Beneyto realiza algunas observaciones desde *El País*, en las que cuestiona ciertos tópicos de los medios periodísticos para explicar las revueltas en las ciudades francesas. Además, observa una continuidad histórica con otros hechos de violencia social ocurridos en las últimas décadas en numerosos países desarrollados.

Dice Vidal que en muchos casos la realidad suele ser diferente de cómo la explican los medios de comunicación masiva. Los suburbios problemáticos franceses son como espejos amplificadores –lentes de aumento de las desigualdades y las injusticias de nuestras sociedades– que el tratamiento político y

policial convirtieron en espacios cautivos de la exclusión, en ámbitos irredentos a punto de explosión.

Si los diarios hablaron de un *mini Mayo del 68*, lo que ha sucedido es justamente su antónimo, observa Vidal. Los estudiantes de entonces querían transformar el mundo, estaban hartos de un bienestar aburrido y castrador y querían alumbrar otra sociedad. La protesta actual apunta justamente a lo contrario: reincorporar a sus miembros a una trama societaria convencional de la que se los ha excluido, a superar una fractura que los expulsa de la vida comunitaria y los deja en la calle.

No piden más que lo que hay –dice el columnista–, pero no aceptan que se les prive de ello. Y si su petición es violenta es porque nuestro contexto es eminentemente violento, el de nuestras calles y el de nuestras pantallas, violencia difusa y casi invisible o violencia explosiva y celebrada que acompaña la mayoría de nuestros comportamientos privados y públicos, familiares y urbanos. Desencadenados siempre por una conciencia colectiva de falta de justicia social. En este contexto, ni siquiera la escuela alcanza a neutralizar la conciencia de tanto rechazo entre los jóvenes de los suburbios.

Según Vidal, la lista es larga de hechos similares al de Francia: Wats, suburbio de Los Ángeles, en 1965, en momentos de expansión económica de EEUU y donde la detención brutal de un joven negro de 21 años desata 10 días de motines y causa 34 muertos; Soweto, en 1976, en pleno *apartheid* sudafricano, los escolares se manifiestan contra la imposición del aprendizaje del *afrikaan* –la lengua de la minoría blanca–, allí la policía mata a un niño de 13 años y la revuelta que se instala acaba con la vida de 23 personas;

Brixton, en 1981, Margaret Thatcher lanza a su policía contra las minorías antillesa e india que quieren salir de su pobreza, lo que se traduce en más de 50 heridos y 9 muertos; South Central, en 1992, este barrio pobre de Los Ángeles es testigo de la paliza que la policía propina a un automovilista negro y se inicia una manifestación que acabará en 55 muertos y más de 2.000 heridos.

Para ilustrar la situación en Francia, el periodista de *El País* cita al filósofo Alain Badiou, quien relataba en un artículo para *Le Monde* que a su hijo adoptivo –un pacífico estudiante negro de 18 años– la policía lo había controlado y cacheado en la calle cinco veces en las últimas semanas, por el solo hecho de ser joven y negro. Si bien la revuelta está amainando y las aguas vuelven a su cauce –observa el columnista–, persiste la fractura social y ciudadana.

De allí que Vidal termine su columna con algunos cuestionamientos: ¿cabe esperar que el Primer Ministro, Dominique de Villepin, cumpla sus promesas y restablezca una serie de medidas tendientes a reforzar la integración tales como: la policía de proximidad, la ayuda a las asociaciones, la creación de empleos para los habitantes de los barrios, una enseñanza apropiada, los mediadores sociales, y todas las medidas instrumentadas por la administración socialista de Lionel Jospin que suprimió su sucesor, y a la vez predecesor de De Villepin, Jean-Pierre Raffarin? En el mismo sentido, ¿se puede esperar que quien suceda al actual Primer Ministro las mantenga? Para Vidal, ese constituye el precio mínimo a pagar.

**Artículo de referencia:** Vidal-Beneyto, José, “Fractura social y ciudadana”, en *El País*, 19 de noviembre 2005.



# Ejes del debate de la educación en España

**Fernando Savater analiza algunos de los fundamentos del proyecto de Ley Orgánica de Educación promovida por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.**

La discusión de la Ley Orgánica de Educación (LOE) promovida por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero generó un fuerte debate en España. Aunque resulte extraño a comienzos del siglo XXI y en un país occidental desarrollado, una de las líneas divisorias de la discusión –que coincide con la confrontación entre la izquierda y la derecha españolas– pasa por la laicidad de la enseñanza pública y la obligatoriedad o no de la asignatura de religión en las escuelas.

Otro tema importante que nutre la polémica es el papel y lugar que debe ocupar el Estado democrático en la formación de una cultura y compromiso ciudadanos. Responsabilidad familiar y responsabilidad pública, constituyen los pesos de una balanza que la dialéctica de unos y otros no logra equilibrar.

Estos temas analiza Fernando Savater en una columna para el diario madrileño *El País*. Además, destaca la necesidad de abordar las

serias deficiencias que desde hace años arrastra la educación en España.

Para Savater, no faltan motivos de alarma y de indignada protesta contra la situación de la enseñanza en las aulas. Por este motivo resulta urgente un trabajo conjunto entre pedagogos y maestros con experiencia docente. El resultado de este trabajo sería un compromiso a asumir sin reservas, ni miopías electoralistas, por los dos partidos parlamentarios: el Partido Socialista y el Partido Popular.

“No puede haber una nueva ley de educación cada cuatro años”, señala el filósofo. Es necesario asegurar el derecho a estudiar de quienes hacerlo, reforzar las medidas que instauren la imprescindible disciplina en las aulas y no someter a los profesores al acoso grosero de boicoteadores con afán de matonismo exhibicionista.

También es importante ofrecer alternativas de formación profesional para quienes muestran una repugnancia por otro tipo de estudios y la exteriorizan impidiendo aprender al resto.

“La cuestión es delicada y compleja: seguramente no depende solamente de preceptos legales sino de un cambio de actitud frente a la propia enseñanza, para el cual conviene releer advertencias contra el laxismo suicida como *La escuela de la ignorancia*, de Jean-Claude Michéa, o el *Panfleto antipedagógico*, de Ricardo Moreno Castillo, aún sin editar”.

Savater reconoce que hay motivos valederos de insatisfacción y objeciones sensatas entre quienes se manifestaron en contra del proyecto de ley. El principal defecto del gobierno es no argumentar una respuesta firme, en lo que respecta al derecho irrestricto de los padres a educar a sus hijos dónde y cómo les parezca. “No he oído ni leído un mentís suficientemente enérgico a esta abusiva pretensión que comporta además el corolario de que el Estado no tiene potestad alguna para educar y debe limitarse a garantizar el derecho de los padres o actuar en ocasiones en forma subsidiaria”. Para empezar, los padres tienen derecho a elegir donde prefieren que sus hijos estudien, pero si optan por la vía pública o concertada, tal elección se somete a la oferta institucional de ese servicio público. En este contexto, resulta significativo que en las discusiones sobre la LOE entre la Iglesia y el Ministerio de Educación, la primera solicitase la supresión de la calificación de la educación como *servicio público*.

Los centros concertados deben cumplir diversos criterios de integración de alumnos inmigrantes y la administración estatal tiene el deber de impedir que se realice en ellos una selección excluyente, apoyada en pretextos económicos. No solo para impedir la formación de guetos elitistas a cargo del presupuesto estatal, sino para evitar cargar a las escuelas públicas con casos problemáticos cuya injusta acumulación dificultaría su tarea.

Hay que educar para la convivencia plural y no para consolidar castas, afirma Savater. ¿Hasta qué punto la formación moral y cívica de los neófitos es asunto que corresponda exclusivamente a sus familias? “No habría mayor problema si los educados lo fueran para quedarse en casa: lo grave es que saldrán a la calle y se mezclarán con los demás”.

Entonces, la preocupación por la educación es social y no solo familiar: financiada con fondos públicos o privados, es siempre un servicio público que debe estar sometido al control responsable de la comunidad. ¿Debe educar el Estado? “Pues claro que sí, en lo tocante a la cohesión de la sociedad y a los valores que son necesarios para que funcione la convivencia democrática”.

Lejos de ser un capricho manipulador, la educación para la ciudadanía es una pieza fundamental en el cumplimiento del desarrollo humano que la Constitución y el sentido común fijan para la educación. Naturalmente, sus contenidos específicos deben ser debatidos.

La educación ciudadana no debe dar lecciones de acatamiento de lo vigente, sino también pautas para modificarlo mediante los mecanismos democráticos. Hay que aprender a manejar la democracia, sin limitarse a respetarla como una vaca sagrada. La formación teórica y práctica para ello consiste en una moral cívica de inspiración humanista que además de brindar normas sepa razonar su fundamento como la explicitación institucional de ciertos valores. En definitiva, los deberes y derechos de la acción en libertad, concluye el español.

**Artículo de referencia:** Savater, Fernando, “Turistas y piratas”, en *El País*, 23 de noviembre de 2005.

# El valor de Nuremberg

**Lluís Bassets explica el lugar de estos juicios en la defensa de los derechos humanos. Desde entonces se castiga a quienes atacan civiles, declaran guerras y cometen actos en nombre de sus ideas y creencias.**

El ideal de Justicia –junto con el de Libertad– constituye uno de los pilares fundamentales de la civilización occidental, y es el basamento sobre donde se asienta el armamento jurídico e institucional del Estado democrático moderno. La ausencia de uno de ellos hace imposible la existencia de los Derechos Humanos.

Sin embargo, la construcción de la vida en sociedad, que nos diferencia de la vida animal, supuso siglos de reflexión filosófica, de elaboración teórica y de mucho sufrimiento humano. Siglos de pensamiento que son el fundamento de la interacción cotidiana con nuestros semejantes, del respeto a nuestra dignidad y a la de los demás.

Aunque hace tiempo que la humanidad dejó atrás el optimismo ilustrado del triunfo de la razón y del progreso, la idea de *proceso* en el camino de la civilización continúa siendo el espejo donde la humanidad aspira a reflejarse.

El sufrimiento infligido a los semejantes y el horror autoinfligido escarmentaron la conciencia de la humanidad acerca del valor de la Justicia. Las propias atrocidades que los seres humanos cometieron y cometen en nombre de ideologías y verdades reveladas también contribuyeron a la degradación de este valor.

En estos días se conmemoraron 60 años del juicio de Nuremberg, un hito histórico que puso las bases para la construcción de una justicia universal. Una Justicia que intenta desenmascarar de cualquier ropaje ideológico, político o religioso las responsabilidades y decisiones que están detrás de la violación de los derechos humanos y la dignidad de las personas.

A este tema y al significado de Nuremberg como un hito en la construcción de una justicia internacional, Lluís Bassets dedica su columna en *El País*. Bassets cuenta que Winston Churchill quería detener y fusilar a los máximos dirigentes alemanes a finales de la II Guerra

Mundial. Además los propios dirigentes nazis estaban convencidos que serían *pasados por las armas* a las horas de su detención.

Para bien de la humanidad, la historia fue distinta y, si hubo juicios en Nuremberg, fue gracias a EEUU, cuyas autoridades improvisaron unos tribunales en semanas para impartir justicia y hacerlo con dignidad y eficacia. Los británicos no querían, mientras que los soviéticos preferían unos procesos para el gran público con el final escrito en el guión. El objetivo era sencillo y trascendental: castigar al grupo de responsables de desencadenar por segunda vez una guerra en Europa.

Importaba el balance en decenas de millones de muertos, las ciudades destruidas, las infraestructuras desaparecidas y las economías arruinadas. Pero todavía no se tenía la exacta medida del horror. Tardaría tiempo en cuajar la idea que el régimen nazi intentó aniquilar a un grupo humano entero mediante una industria del asesinato en masa. El concepto de genocidio se acuñó alrededor de Nuremberg y el de Holocausto apareció mucho después.

El primero de los juicios tiene un significado fundacional para el derecho penal internacional. Definió un nuevo tipo de delitos, los crímenes contra la paz y contra la humanidad –considerados como imprescriptibles–. La principal figura penal, la de los crímenes contra la paz, incluye la guerra de agresión.

Además de tener una función pedagógica para los alemanes, también la tuvo para la opinión pública mundial. Incluso una función historiográfica: sin ellos hubiera sido difícil recoger documentación, interrogar a personas, movilizar medios.

Si se llegó lejos en el conocimiento de este desastre de la humanidad es por el esfuerzo que significó aquel intento de impartir justicia. También a ello se deben algunos avances

conceptuales de utilidad posterior: existe una obligación moral y política en castigar a quienes atacan a civiles, declaran guerras de agresión y cometen actos bárbaros en nombre de sus ideas y creencias; los jefes de Estado no gozan de inmunidad cuando emprenden guerras deliberadas; las responsabilidades son individuales; no delinquen los pueblos ni las instituciones, sino los individuos; y no hay lugar para la obediencia debida.

La justicia fue entonces imperfecta, pero hubo proceso y con él hubo derecho a la defensa, aportación de pruebas y argumentos. También hubo condenados y absueltos. Todo esto ocurrió gracias a EEUU, a sus juristas, pero también a sus responsables políticos y militares y al presidente Harry Truman. ¿Qué lejos de la actual administración republicana de EEUU quedan todos estos méritos?, reflexiona Bassets.

Milosevic, Sadam Husein y Pinochet son hijos de Nuremberg, compañeros de Göring, Keitel y Ribbentrop en el banquillo de la historia. Sin aquel proceso no habría ahora otros contra estos dictadores infames. Pero EEUU que permitió Nuremberg, ahora está en contra de la Corte Penal Internacional y se enloda en una carrera del horror que atormenta al mundo: las mentiras de las armas de destrucción masiva; las torturas de Abu Ghraib; el limbo jurídico de Guantánamo; la red de cárceles en Europa; las dictaduras utilizadas como zonas francas del crimen de Estado; los bombardeos con fósforo blanco; y la apología de una guerra preventiva contra el terrorismo que da licencia para cualquier cosa y degrada a quien la utiliza. Pobre EEUU y pobres de nosotros, concluye Bassets.

**Artículo de referencia:** Bassets, Lluís, "De Göring a Pinochet", en *El País*, 24 de noviembre 2005.

# El problema de la *des-integración social*

**En relación con los disturbios ocurridos en Francia, Ulrich Beck refuta las explicaciones de índole racial, cultural o religiosas y relaciona estos sucesos con el carácter expulsor del capitalismo en su versión globalizada.**

No es ajena a los hechos de violencia social ocurridos en Francia, la presencia de un fenómeno que viene tomando forma en las últimas décadas y que excede las fronteras del país galo: la exacerbación de los rasgos más especulativos y excluyentes del capitalismo de la globalización.

En efecto, la fuerte *financierización* de la economía mundial deja atrás el sesgo productivo del capital y nos pone frente a una dinámica empresarial donde las compañías racionalizan gran cantidad de personal a la vez que anuncian niveles históricos de ganancias. Ahora, las empresas no valen por los bienes que producen, ni siquiera por el capital del que se componen: se cotizan por su capacidad de generar ganancias, de producir utilidades en la Bolsa.

La inequidad se convierte en una de las marcas de identidad del capitalismo en la era de la globalización. Y amén de la tradicional desigualdad entre países ricos y pobres, empieza a sentirse en las sociedades desarrolladas

la ampliación de la brecha entre los sectores más y menos pudientes de la población. Las debilitadas costuras de la malla de integración social construida por los estados europeos de posguerra comienzan a crujir y estallar en fenómenos de violencia anómica y sin bandera *ideológica* alguna.

A propósito de este tema y en relación con los disturbios ocurridos en Francia, Ulrich Beck –sociólogo alemán y catedrático de la Universidad de Munich– refuta desde *El País* las explicaciones de índole racial, cultural o religiosas sobre lo acontecido en las ciudades francesas. Dice Beck que las lentes conceptuales para comprender la nación están cambiando, así como tampoco sirven los conceptos de “desempleo”, “pobreza” y “jóvenes inmigrantes”.

De hecho, se está produciendo un nuevo tipo de conflicto del siglo XXI. La pregunta clave es: ¿qué ocurre con los excluidos del maravilloso nuevo mundo de la globalización?

La globalización económica –explica Beck– llevó a una división del planeta que quebró las fronteras nacionales, con lo que aparecieron centros industrializados de crecimiento acelerado al lado de desiertos improductivos, y estos no están solo “ahí fuera” en África, sino también en Nueva York, París, Roma, Madrid y Berlín. *África* está en todas partes: se convirtió en un símbolo de la exclusión.

Hay un África *real* y otras *metafóricas* en Asia y en Suramérica, pero también en las metrópolis europeas donde las desigualdades del planeta, en su tendencia globalizada y local, dejan su impronta particular. Y las definiciones de “pobre” y “rico”, que parecían eternas, se están transformando.

Los *ricos de antes* necesitaban a los pobres para convertirse en ricos. Los *nuevos ricos* de la globalización ya no necesitan a los pobres. Es por eso que los jóvenes revoltosos sopor-tan, además de la pobreza y el desempleo, una vida sin horizontes en los suburbios de las grandes metrópolis. Porque las nociones de “pobreza” y de “desempleo”, tal como nosotros las entendemos, proceden de las tensiones de poder de la sociedad de clases propia de un Estado nacional.

Desde esta perspectiva, es de suponer que –para grupos cada vez más extensos de la población mundial– es cada vez menos válido que la pobreza sea una consecuencia de la explotación y que esta última continúe siendo útil. La premisa histórica de que la pobreza de unos crea la riqueza de otros se ha roto, sentencia Beck. Sencillamente, los pobres ya no son necesarios, ya no forman aquel “ejército de reserva” del que hablaba Marx, que presionaba a la baja sobre el precio de la fuerza de trabajo humano. Los pobres ya no son necesarios porque la economía crece sin su contribución y los gobernantes son elegidos sin sus votos.

Los jóvenes *superfluos* son ciudadanos sobre el papel, pero en realidad son *no-ciudadanos*. Quedan fuera, incluso, del mundo de las reivindicaciones de los trabajadores.

En muchos países, se cree de manera obsesiva que hay que buscar las causas que llevan a los jóvenes inmigrantes alborotadores a la violencia en las tradiciones culturales de origen de estos inmigrantes y en su religión. Los estudios empíricos demuestran lo contrario: no se trata de los inmigrantes que no se integraron, sino de los que sí lo han hecho.

Entonces hay una contradicción entre la asimilación cultural y la marginación social de estos jóvenes, que alimenta su odio y su predisposición a la violencia. No se trata de inmigrantes anclados en su cultura de origen, sino de jóvenes con pasaporte francés, que hablan perfectamente el idioma y que pasaron por el sistema escolar francés, pero a los que la sociedad francesa de la igualdad los marginó en auténticos guetos *superfluos* en la periferia de las grandes ciudades.

Se habla de inmigrantes, pero nos olvidamos que son franceses. Se pone en el punto de mira al Islam, pero se ignora que a muchos de los incendiarios les importa un bledo la religión. Se evoca la importancia del origen y no se quiere admitir que las llamas surgen del haber nacido *aquí*, de la exitosa asimilación y precisamente de la *Égalité* que interiorizaron. Se trata al fin y al cabo –concluye Beck– de una sublevación airada típicamente francesa contra la dignidad herida de los *superfluos* y a favor del derecho a ser iguales y diferentes.

**Artículo de referencia:** Beck, Ulrich, “La revuelta de los superfluos”, en *El País*, 27 de noviembre de 2005.



**Dirección General de  
Cultura y Educación**  
Gobierno de la Provincia  
de Buenos Aires